

En ejercicio

“En muchos casos, acudir a la justicia es un calvario para el ciudadano”

La Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional apoya la formulación de una política pública para garantizar que el ciudadano pueda acceder a este servicio. Al frente de esa división del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia) se encuentra Nicolás Pájaro Moreno, un joven abogado que, luego de su paso por el sector privado, se encaminó laboralmente al servicio público de justicia.

Según explica Pájaro, aún subsisten en la administración de justicia estructuras, esquemas y modelos de gestión inadecuados e, incluso, anacrónicos. “Es paradójico que, en el marco de una sociedad globalizada, el sistema todavía se valga de los mismos mecanismos procesales de los códigos judiciales del siglo XIX”, explica.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué labores, específicamente, ejecuta la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional?

Nicolás Pájaro Moreno: Desde aquí, trabajamos para determinar cuáles son las barreras que impiden que el ciudadano pueda defender sus derechos ante los distintos órganos de la justicia formal y realizamos las gestiones necesarias para eliminarlas o mitigarlas. En ese sentido, preparamos proyectos de deregulación, servimos de puente entre el Gobierno y la Rama Judicial para la implementación de políticas conjuntas y apoyamos el levantamiento de múltiples barreras al acceso a la justicia, como ocurre con las víctimas de violencia intrafamiliar basada en género, entre otros temas. Últimamente, impulsamos encuentros entre los distintos actores en las regiones, para verificar el estado de la justicia en el ámbito local y promover iniciativas que mejoren la cobertura y la calidad del servicio.

Á. J.: ¿Cuáles son los retos más importantes?



FOTO: Humberto Pardo

N. P. M.: El entorno en el que opera nuestra justicia es complejo y ofrece muchos retos. Gran parte de ellos se hacen evidentes en la simple observación de la realidad de la justicia, como las necesidades de descongestión, de racionalización del uso de los mecanismos procesales, de gestión del cambio cultural, de modernización de la justicia e implementación de las nuevas tecnologías, entre otros.

De acuerdo con informes internacionales, Colombia tiene una de las justicias más lentas del mundo. *Doing Business 2013* nos ubica como la séptima más demorada, entre 185 países. Otros estudios, como el

que realizan el *World Justice Project* y el Foro Económico Mundial, también nos sitúan en los últimos lugares, cuando se trata de analizar si en los procesos existen demoras injustificadas.

Á. J.: ¿Qué factores inciden en esas bajas calificaciones?

N. P. M.: El más notorio es la congestión judicial: al 2012, la Rama Judicial tenía más de 2.200.000 expedientes inventariados, para ser resueltos por unos 4.800 despachos, organizados en una estructura jerárquica compleja. Además, debe tenerse en cuenta la alta demanda de servicios de justicia. Al año, en el país se presenta una cifra muy por encima del medio millón de tutelas. Algunos jueces reciben para su conocimiento cerca de 2.000 expedientes anuales. A ello se suma que vivimos en un país en el que predomina la cultura de la litigiosidad, en el que es común ver que los procesos se extienden indefinidamente, debido a las estrategias dilatorias a las que, infortunadamente, recurren no pocos abogados. Acudir a la justicia, en muchos casos, es un calvario para el ciudadano, que se ve envuelto en un ir y venir de memoriales, recursos, nulidades y en un atropellado viaje hacia un fallo que tal vez nunca llegue.

Á. J.: ¿Cómo está el país frente a la atención de la violencia basada en género?

N. P. M.: En los últimos años, se han registrado cifras alarmantes en esta materia. La violencia intrafamiliar y, dentro de esta, la basada en género, ha generado un número preocupante de víctimas, algunas fatales. Pero, más grave aún, en el imaginario de la población y de los mismos funcionarios, no existe una sensibilidad hacia los temas de género que permita atender y decidirles adecuadamente a las víctimas que acuden a la justicia. Por eso, el Minjusticia desarrollará un ambicioso programa de capacitación a los comisarios de familia, para brindarles herramientas que les permitan mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia basada en género.

“El entorno en el que opera nuestra justicia es complejo y ofrece grandes retos”.

Nicolás Pájaro Moreno

Estudios realizados: abogado de la Universidad Externado y especialista en Derecho Comercial y magister en Derecho Privado de la Universidad de Los Andes.

Cargos desempeñados: asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia), profesional especializado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y abogado de Rodríguez Espitia Abogados y de Manrique y Asociados S. A.

Ocupación actual: director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Minjusticia y docente universitario.

Demandas de inconstitucionalidad

Aprobación de proyectos financiados con regalías

Fue presentada una acción de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 31 de la Ley 1606 del 2012, que obliga a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados por los fondos de compensación regional y de ciencia, tecnología e innovación a obtener el voto positivo del Gobierno. El demandante señala que esta disposición, contenida en el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014, vulnera los artículos 1°, 4°, 287, 298, 311 y 361 de la Constitución, pues, a su juicio, el Ejecutivo impone su voluntad sobre

las entidades territoriales, elimina el acuerdo, convierte su criterio en una imposición unilateral y abusiva y reduce a los departamentos a la condición de receptores pasivos.

(Exp. 9538. Demandante: Juan Francisco Lozano Ramírez)

Recursos contra actuaciones administrativas

El artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/11) determinó las reglas que se deben tener en cuenta frente a la petición y práctica de pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. La demanda busca la inexistencia de una expresión contenida en

dicha norma que impide la procedencia de recursos en contra del acto que decida la solicitud de pruebas. A juicio del ciudadano, la disposición censurada lesiona la garantía del debido proceso.

En su opinión, la norma hace nugatorio el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, pues muchas actuaciones no se podrán controvertir durante el debate probatorio.

(Exp. 9566. Demandante: Juan José Gómez Urueña)

Contribuciones para espectáculos públicos

Se aceptó una demanda en contra de los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 37 de la Ley 1493 del 2011, que creó una contribución

para fiscal con cargo a la boletería de los espectáculos públicos de artes escénicas.

El demandante señala que se vulnera el principio de autonomía tributaria, la descentralización y los derechos económicos de los municipios, consagrados en los artículos 1°, 287 y 362 de la Constitución. Con el régimen anterior, por impuesto de espectáculos públicos se cobraba el 20 % sobre el valor de la entrada, pero hoy solo se cobra el 10 %, advierte el escrito. Además, la norma limitó el valor de la boleta que causa la contribución.

Por esas razones, el demandante cree que se disminuye el ingreso tributario municipal, hecho que vulnera varios artículos superiores.

(Exp. 9546. Demandante: Juan Carlos Becerra Hermida)

Lo nuevo en

COMERCIAL

» Gobierno reglamenta beneficios para pequeñas empresas previstos en la Ley 1429

Mediante el Decreto 489 del 2013, el Ejecutivo reglamentó algunos aspectos de la Ley 1429 del 2010 (Ley de Formalización y Generación de Empleo). Entre otras disposiciones, las pequeñas empresas creadas entre el 29 de diciembre del 2010 y el 25 de febrero del 2011 que tenían derecho a los beneficios de la Ley 1429, pero no los pidieron porque la norma no había sido reglamentada, podrán solicitar la devolución o compensación de lo pagado en exceso.

(Mincomercio, D. 489, mar. 14/13)

CONTABLE

» Imparten instrucciones sobre implementación de NIF para microempresas

La Superintendencia de Sociedades instruyó a las entidades supervisadas sobre la preparación de un plan de implementación para aplicar el marco normativo del Decreto 2706 del 2012. Así mismo, anunció la expedición de la “Guía general de aplicación por primera vez para la elaboración del estado de situación financiera”, que podrá descargarse de la página web www.supersociedades.gov.co, a partir del 15 de abril.

(Supersociedades, Circ. Externa 115-000003, mar. 14/13)

FINANCIERO

» Cambios en administración de riesgos asociados a depósitos electrónicos

La Superintendencia Financiera estableció las condiciones y trámites especiales para el manejo y la administración de los riesgos asociados a depósitos electrónicos. De esta manera, modificó la Circular Básica Jurídica, al adicionar el numeral 7°, “Instrucciones relativas a la administración y el manejo de los depósitos de dinero electrónico de personas naturales”, al capítulo sexto del título II, y cambiar el literal g) del numeral 4.2.2, “Procedimientos”, y 5.2, “Transferencias nacionales”, del capítulo décimo primero del título I de la citada circular.

(Superfinanciera, Circ. Externa 7, mar. 19/13)

Estas novedades las podrá encontrar en las publicaciones actualizables de LEGIS.

+ INFORMACIÓN
ambitojuridico.com

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA